

LUCHA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO

UN ASUNTO de todos

Por Diana Farfán y Miguel Niño

Sandro Calvani, responsable de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU en Colombia, afirma que el problema en la lucha contra el narcotráfico, estriba en la actitud de la sociedad civil. Sin movilización social, sin un cambio de actitud, no será posible la erradicación de los cultivos ilícitos, asevera.



Sandro Calvani, italiano de Génova, Licenciado en Biología, y especializado en Desarrollo Social y Gestión del Conflicto en la Universidad de Harvard ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en diversas entidades de las Naciones Unidas promoviendo el desarrollo social. Desde enero de 2004 es responsable de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, con sede en Colombia. En una entrevista exclusiva para Ciudad Nueva, relató cómo es posible combatir la droga, pero no desde su Oficina, sino a través de las experiencias vividas por

campesinos que creyeron y que trabajan por nuevos proyectos de vida.

– Sr. Calvani, ¿cuál fue su impresión al llegar a Colombia?

– «Tras 20 años de trabajo en los cuatro Continentes, al llegar a Colombia he tenido la impresión de que existe una gran fragmentación del análisis sobre los problemas y, obviamente, esto trae consigo una fragmentación de las decisiones políticas y de las estrategias para reducir el conflicto. La dinámica del conflicto colombiano

presenta miles de variables y si no se tiene una visión completa, es muy difícil afrontarlo.

«Al llegar a Colombia encontré en la Oficina cientos de tesis, libros, etc., totalmente accesibles y con una cantidad de análisis en todos nuestros campos: narcotráfico, delito, terrorismo, grupos armados, tráfico de personas, lavado de dinero, etc. Se conoce muy bien el problema y se sabe todo sobre lo que se debería hacer...¡Pero no se hace todo lo que se podría hacer!

«En otros países donde he trabajado, mucho más pobres, no existía todo este material. Aquí, en cam-



bio, casi todas las semanas hay dos o tres seminarios muy bien preparados; sin embargo, no se ha logrado estructurar un Plan Nacional con un enfoque hacia la agricultura, el campo, los campesinos. Sólo existe el Programa Presidencial que funciona, sin que se involucren el Ministerio de Cultura, el de Energía, el de Transporte o el de Comunicaciones...».

— ¿Han tenido aceptación dentro del Gobierno estas impresiones tuyas?

— «En todos los Departamentos que he visitado el Gobernador siempre dice: «el narcotráfico colombiano es un problema fundamental, es un problema tan enorme que prácticamente no sabemos cómo enfrentarlo, todo el mundo está metido en el narcotráfico...», y me dan estadísticas exageradas.

«En Nariño, por ejemplo, el Gobernador Eduardo Zuñiga, un antropólogo, me dijo: «tenemos 50 mil hectáreas de cultivo ilícito» y yo le respondí: «50 mil hectáreas es tres veces la producción ilícita de Bolivia. Pero tenemos fotografías satelitales de todos los lugares y estamos bien seguros que son menos de 15 mil hectáreas».

«En Cúcuta, la semana pasada, el Gobernador Hugo Aguilar Naranjo afirmó: «en el Catatumbo muchos campesinos están metidos en la producción de cultivos ilícitos». Le pregunté: «¿Está seguro?» Me respondió: «Sí». Le dije: «Tenemos fotografías aéreas y satelitales que nos dicen que Norte de Santander



Con la nueva ley de energía, Colombia debe producir antes de enero de 2006 el 5% de alcohol carburante para mezclarlo con gasolina y diesel que se extrae del aceite de palma. Para alcanzar estos mínimos, se necesita cultivar al menos 600 mil hectáreas.

FAMILIAS GUARDABOSQUES

El Programa se desarrolla en 14 departamentos, 35 Municipios y un Resguardo Indígena, y cuenta con 32.000 familias vinculadas en forma voluntaria. Fue creado y financiado por la Presidencia de la República de Colombia y está dirigido a familias campesinas, indígenas y afrocolombianas, ubicadas en ecosistemas importantes para nuestro País, que se encuentran involucradas en los cultivos ilícitos o están en ries-

go de verse afectadas por este problema.

El Programa ofrece un incentivo económico temporal para aquellas familias que derivan su sustento del trabajo de la tierra, desean erradicar dichos cultivos y están dispuestas a trabajar con los demás miembros de la vereda, además de brindarles acompañamiento social y técnico-ambiental a cambio de su trabajo en proyectos de recuperación y conservación de ecosistemas estraté-

gicos, así como en el aprovechamiento sostenible de recursos naturales.

La violencia, la destrucción de la familia, el trabajo infantil, la deserción escolar y la carencia de servicios de salud y educación, entre otros aspectos negativos de la producción de coca y amapola, han sido una realidad permanente en muchas zonas de Colombia.

El Programa constituye una herramienta para cambiar las difíciles circunstancias en las que viven estas familias campesinas, para generar un capital social, progresar como comunidad, fortalecer las organizaciones económicas y de acción comunal y atender sus necesidades particulares.

tiene menos de 5 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Ahora bien, para que sea rentable, un campesino debe tener por lo menos 1.4 hectáreas, por tanto, estaríamos hablando de 3.500 familias en un departamento donde hay aproximadamente 400.000 campesinos, es decir, apenas el 1 por ciento.

«Así, sobredimensionando el problema, se tiene la impresión de que no se puede afrontar. Y a nivel nacional se dice que el problema es tan grande que ninguna otra institución del Estado podría afrontarla, justificando así la inactividad de muchas de ellas.

«Si no nos fallan las informaciones, las 80.000 hectáreas de cultivo ilícito de Colombia representan el 0.07% de la superficie total del país, y las familias que producen coca representan menos del 1% del total de las familias campesinas. Ahora bien, siendo que una gran parte del cultivo no está en territorio agrícola sino en el bosque, este territorio es tan sólo una pequeña manchita que ni siquiera se podría ver, pero que se exagera para no enfrentarla con una erradicación completa y definitiva».

— ¿Podría darnos un ejemplo concreto?

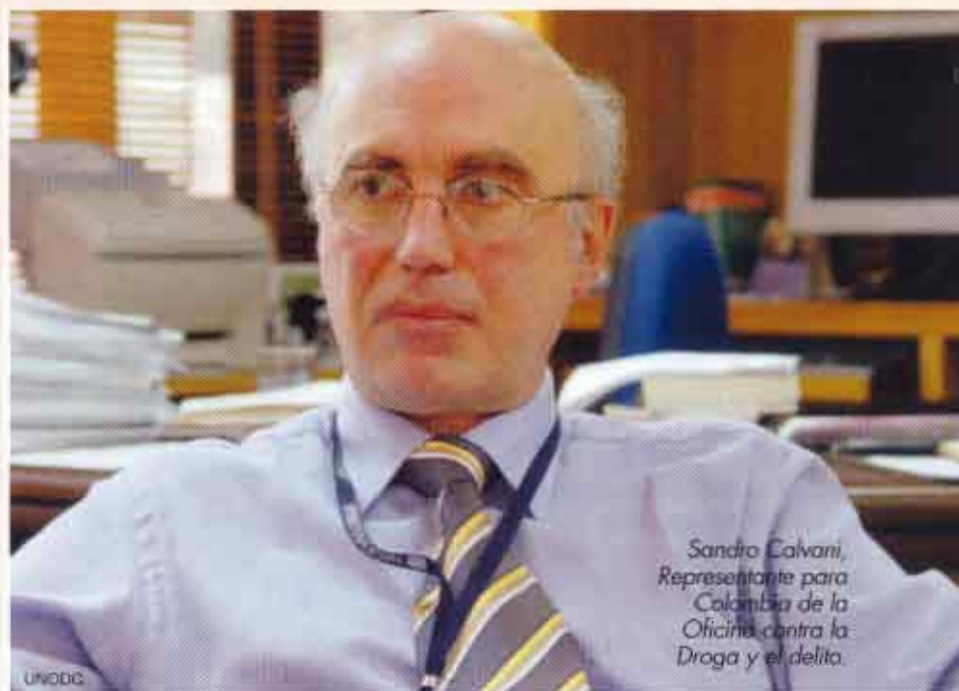
— «Con la nueva ley de energía, Colombia debe producir antes de enero de 2006 el 5% de bio-alcohol de caña carburante para mezclarlo con gasolina y palma de aceite para generar biodiesel. Para alcanzar estos mínimos, se necesita cultivar al menos 600 mil hectáreas y, según la cifra oficial del Ministerio de Energía, se tendría que llegar a 860 mil, una extensión que es 8 ó 10 veces mayor que la de los cultivos ilícitos.

«De esta manera, cumpliendo sólo la ley y con recursos propios, se haría suficiente para acabar con los cultivos ilícitos. En un Departamento rico, como Antioquia, sólo hay 5 mil hectáreas de cultivo ilícito; con un pequeño esfuerzo del sector empresarial se podría solucionar».

— Entonces, ¿por qué no se ha resuelto el problema?

— «Según mi opinión, porque falta una movilización de la sociedad civil. El éxito que hemos visto en otros lugares como Tailandia, Laos, Vietnam, Turquía, países

20 AÑOS CONSTRUYENDO SEGURIDAD HUMANA EN COLOMBIA



Sandro Calvani,
Representante para
Colombia de la
Oficina contra la
Droga y el delito.

En Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas y el Delito (UNODC) inició sus actividades en julio de 1985 a través de un convenio realizado entre el Gobierno y esta Oficina, para coordinar todas las actividades de fiscalización de drogas y prevención de delitos, promoviendo la observación y el cumplimiento de los tratados internacionales, y ofreciendo un liderazgo eficaz en estos campos.

La Oficina está destinada a convertirse en el centro mundial de conocimientos especializados sobre el uso indebido de drogas y la prevención del delito.

La Oficina debe apoyar al país en el diseño, implementación y promoción de políticas sobre el problema mundial de las drogas y del delito internacional organizado, a través de la puesta en marcha de proyectos y programas de asistencia técnica, legal y financiera.

Los programas de la UNODC, incluyen la sustitución de cultivos ilícitos a través de proyectos de desarrollo alternativo, la reducción de la oferta y la demanda de drogas

ilícitas, el lavado de dinero, el crimen organizado, la trata de personas, el terrorismo, la corrupción y el fortalecimiento de la justicia, en lo relacionado con la actualización y el desarrollo del régimen legislativo y la tipificación de estos delitos.

La Oficina de UNODC actúa como interlocutora de los Estados Miembros en los aspectos político, legislativo, judicial, económico, técnico y de cooperación multisectorial. Constituye así mismo un centro mundial de información y conocimientos especializados sobre la problemática de las drogas y sobre las alternativas para superarla.

Actualmente, la UNODC tiene la sede principal en Viena y cuenta con 22 oficinas nacionales y regionales que, en su conjunto, cubren cerca de un centenar de países, en todos los continentes.

En la Oficina de Colombia, se coordinan esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Colombiano y los países donantes para suprimir las drogas ilícitas y prevenir crímenes internacionales.

que han eliminado cultivos ilícitos de manera definitiva y sostenida, lo ha logrado porque se ha movilizó la nación entera.

«Colombia no se ha movilizó plenamente. Se dice que hay una guerra contra las drogas, yo no la veo; el Plan Colombia sí la hace, pero el resto del país no se involucra. Voy a hablar con las autoridades de departamentos afectados como Meta, Guaviare, Caquetá. Se hace una reunión, se establecen algunas medidas urgentes para reducir cultivos... Después de una semana, todo está olvidado.

— ¿Cómo ve el Programa que desarrolla la Presidencia para la erradicación de cultivos?

— «Lo que se está haciendo como desarrollo alternativo va muy bien. Este es uno de los programas de desarrollo alternativo más exitosos del mundo, en términos de calidad del producto, de movilización popular, de sostenibilidad.

Son 25 productos, algunos de los cuales son campeones del mundo, como el café orgánico, el palmito, la miel orgánica.

«Además, todo el proceso: consultar con los campesinos, producir, empaquetar, comercializar..., en tan sólo ocho meses, es el más rápido del mundo. Pero los productos de este desarrollo no llegan ni siquiera al 20% de la población afectada.

«El fenómeno reviste una mayor importancia si se tiene en cuenta que la fumigación se debe repetir cada año, porque anualmente tenemos un 62% de cultivo nuevo. Y no es que la fumigación no funcione; es barata, cubre el 100% del Territorio Nacional, no es dañina, pero la gente sigue sembrando la coca o la amapola. Es como si Ud. fumiga su habitación porque hay demasiados zancudos: duerme bien esa noche pero la noche siguiente tiene el mismo problema. Entonces, hay que preguntarse de dónde vienen los zancudos y solucionar así el problema».

— ¿Piensa, por ejemplo, que los empresarios deberían brindar un apoyo más decidido?

— «Sí, Colombia ha sido un País aislado, en este aspecto, durante décadas. Cuando llegué, les pregunté a los funcionarios del Gobierno si la política que estaban desarrollando tenía que ver con la buena práctica de Perú, o si estaban tomando como referencia la experiencia en Tailandia, Turquía, o Pakistán. No sabían que Turquía en los años 60 era el principal productor de cultivos ilícitos del mundo y que ahora está en puertas para entrar en la Unión Europea.

«Por su parte, Tailandia tenía 150 mil hectáreas de heroína y de opio, un problema más serio que Colombia, con más de 50 mil hombres armados. Con algunos expertos de la Presidencia visitamos Tailandia y quedaron sorprendidos con este país que está creciendo al 11% por año y que terminó con los cultivos ilícitos en 1999, gracias a la movilización nacional.

PRODUCTOS DE PAZ

ALIMENTOS DE PAZ QUE GENERAN INGRESOS LEGALES

Con el fortalecimiento de las Organizaciones Campesinas en nueve departamentos del país —Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Antioquia, Magdalena y Bolívar— los proyectos de Naciones Unidas están contribuyendo a la generación de ingresos legales en las regiones en donde hay mayores cultivos ilícitos.

Desde 1996, la UNODC beneficia a unas 8.000 familias campesinas con alternativas como la ganadería (carne y leche) y los cultivos (café, frijol, cacao, plátano, frutas, palmitos, miel, caña de azúcar, entre otros). Estos productos que ayudan a sustituir cultivos de coca y amapola se han denominado “productos de paz” y se encuentran en algunos supermercados del país o se exportan a Europa y Estados Unidos.

Varios de estos productos son protectores del medio ambiente (orgánicos, biológicos o ecológicos) y tienen



la certificación pertinente de las autoridades competentes que los cataloga como alimentos libres de químicos y sustancias tóxicas externas reales o potenciales contra la salud.

Actualmente, la importancia que los mercados especializados le asignan a una producción más saludable y sostenible de alimentos, hace que el desarrollo de iniciativas en torno a la producción orgánica sea uno de los desafíos más importantes de la agricultura y, por lo tanto, del desarrollo alternativo.

La agricultura orgánica tiene algunas ventajas que también son objeto de desarrollo alternativo; por ej., la producción agrícola depende más de los recursos propios internos, que de la aplicación de recursos externos; se logra una mayor estabilidad económica con el manejo del sistema productivo (rotación, diversificación y asociación de cultivos); se incorporan los concep-

tos de valor agregado y de transformación de la producción en su lugar de origen, en manos de quienes producen; se respeta ampliamente la práctica y el dominio de los conocimientos tradicionales aplicados a los sistemas de producción; se les da mayor atención a los consumidores y a los campesinos al eliminarse totalmente el uso de venenos en la agricultura; la población está más sana y segura de lo que consume y la calidad de los alimentos y de la vida mejora.

Por otra parte, el espíritu de los “productos de paz”, orgánicos y ecológicos, radica en la responsabilidad de asegurar la producción de alimentos inocuos y nutritivos a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. El desafío consiste en diseñar sistemas integrales y eficientes que aseguren la participación de todas las instancias en cada una de las etapas, desde el cultivo hasta la mesa. ■



Café de Colombia

«Queremos lanzar el año próximo una campaña de "productos de paz" para movilizar la sociedad civil, con la ayuda de la Iglesia, de las ONGs...

Hay que llegar a que la compra de estos productos se convierta casi en un deber: ¡Si compras un "producto de paz" estás acabando con la violencia!».

Entonces me dijeron: «¿Nos puedes presentar al director del "Plan Tailandia"?» Les respondí: «Allí el Ministerio de Comunicación tenía como prioridad número uno eliminar los cultivos ilícitos y ponía una oficina de correos en cada lugar donde había estos cultivos para que la gente se abriera al mercado. De igual forma, el Ministerio de Transporte construía carreteras y aeropuertos donde se sembraba opio, mientras el de Turismo promovía el Ecoturismo en esos lugares. Esto significa que todo el país estaba comprometido, que se movilizaba».

— ¿Cómo podríamos lograrlo en Colombia?

— «Doy un ejemplo: la sociedad civil tendría que favorecer la comercialización de los productos de desarrollo alternativo, los "productos de paz", en todos los

supermercados. Si cada familia colombiana comprara dos bolsas de frijol o una bolsa de café orgánico por año, no por semana, sólo por año, se necesitaría cultivar más de 80 mil hectáreas para producirlos.

«Aquí la gente no se moviliza, no sienten la urgencia y las empresas no han comprendido su gran importancia.»

— En este sentido, ¿hay alguna propuesta para cambiar la situación?

— «Ahora estamos intentando con el Presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, el Sr. Eduardo Pizarro, lanzar el año próximo una campaña de "productos de paz" para movilizar la sociedad civil, con la ayuda de la Iglesia, de las ONGs... Hay que llegar a que la compra de estos productos se convierta casi en un deber: ¡Si compras un "producto de paz" estás acabando con la violencia!».

«La semana pasada estuve en Florencia. Con recursos propios y la ayuda internacional, han construido la planta más grande de caucho del país y producen el 3% de la producción nacional, con un mercado disponible del 97% restante. Pero a pesar de que este caucho tiene la calidad más alta de los requerimientos de Michelin y otras

empresas, aún no tiene un apoyo a nivel nacional para que aumente la producción en el Caquetá, donde el caucho es una planta nativa.

«Hablé con el representante de la Asociación de 2000 familias del Caquetá y me dijo que trabajaba de las 6 a las 9 de la mañana para rayar la planta y extraer el látex y ganaba más de un millón de pesos al mes. Cuando le expresé que era más de lo que ganaba con la coca me explicó que aunque fuera tres veces menos, no lo volvería a hacer porque ahora ha encontrado una vida digna, sin violencia ni politiquería. Él y su familia viven tranquilos.

«Esto es lo que yo llamo "fumigación de los cerebros"; es decir, cambio de la actitud de la gente, porque la coca no viene ni de las raíces, ni de la selva, ni de la tierra. La coca viene de la gente y hasta que no se cambie la actitud de ésta, que debe llegar a comprender que no se debe hacer porque es ilícito, la situación continuará. ¡Es un problema de legalidad!».

— ¿Se han desarrollado otras iniciativas?

— «También hemos colaborado con el Programa de familias guardabosques. Empezamos a desarrollar actividades productivas mediante acompañamiento, fortalecimiento del capital social, situación de la tierra, para que las personas controlen su territorio responsablemente. Actualmente, el Programa ayuda a 2000 familias.

«Una experiencia que le gustó mucho al Presidente Álvaro Uribe fue ésta: en el Municipio de Albán, una población muy pobre en Nariño, la comunidad había ahorrado 15 mil millones de pesos. El Programa Familias Guardabosques es el único programa del mundo manejado al ciento por ciento por las mujeres, que tienen una gran capacidad para administrar los bienes.

«Además, los grupos armados ilegales no las pueden "vacunar" porque el dinero está en una cuenta bancaria protegida. Solicitaron los recursos para comprar una máquina procesadora de tomate para procesar la producción que no logran comercializar.

«En el fondo, la verdad es que la movilización de la sociedad puede hacer más que las instituciones.»